



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, trece de octubre de dos mil veintitrés

22-062

Proceso: ORDINARIO LABORAL- Apelación sentencia
Demandante: **JAIME GALLEGU GRAJALES**
Demandado: **COLPENSIONES y PROTECCION S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-003-2018-00890-01.
Tema: ineficacia traslado y pensión vejez
Decisión: **MODIFICA**

Link: [22-062 \(003-2018-00890\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y Protección S.A. contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Conforme los memoriales allegados en esta instancia, se reconoce personería a los siguientes:

- A la doctora NATALLY SIERRA VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.152.441.386 y T.P. N° 258.007 del C. S. de la J. para representar los intereses de PROTECCIÓN.
- A la Dra. LUISA FERNANDA SÁNCHEZ NIETO identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.032.392.752 y T.P. N° 329.278 del C. S. de la Judicatura, para representar los intereses de Colpensiones, en los términos de la sustitución de poder otorgada por la Dra. ELIANA MORENO PEDROZA en calidad de Representante Legal de la Sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S. que funge como apoderada principal de la entidad.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes

integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 34** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita el demandante que tras declararse la **INEFICACIA** del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad, ordenándose a PROTECCIÓN S.A trasladar a COLPENSIONES todos y cada uno de los aportes incluyendo los rendimientos financieros que reposen en su cuenta de ahorro individual. Consecuencialmente, solicita que se ordene a esta última entidad recibirlos e incluirlos como periodos de cotización, reconociendo la PENSIÓN DE VEJEZ junto con las mesadas adicionales de diciembre de cada año, además de los intereses moratorio regulados en la Ley 100 de 1993 y/o la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 9 de diciembre de 1956
- ✓ Que el 8 de marzo de 1979 se afilió a los riesgos IVM que administraba el ISS, hoy Colpensiones cotizando un total de 532.14 semanas.
- ✓ Que el 18 de noviembre de 2000 cuando tenía 42 años de edad y devengaba un promedio de 3 SMLMV, se trasladó a Protección S.A., entidad en donde cotizó un total de 859 semanas (enlista la información suministrada y aquellos aspectos que nunca le explicó el asesor, circunstancia que considera lo indujo en un error).
- ✓ Que actualmente cuenta con 1.391 semanas cotizadas en toda la vida laboral.
- ✓ Que la decisión de traslado al RAIS no fue espontánea, voluntaria y libre, pues al momento de firmar el contrato laboral con Coltabaco S.A.S., solo se encontraba Protección S.A. afiliando a nuevos empleados que ingresaban a laborar con esta empresa. En ese sentido, la única decisión que pudo tomar en ese momento fue cambiarse de fondo.
- ✓ Que Colpensiones fue omisiva en o haberle brindado una asesoría precisa, clara, coherente, suficiente sobre las consecuencias de su traslado.
- ✓ Que el 12 de abril de 2018 solicitó a COLPENSIONES el traslado al RPM, el cual le fue negado por estar a menos de diez años de adquirir el derecho a pensionarse.
- ✓ Que tras la solicitud de una proyección pensional, Protección le informó que su mesada pensional sería de aproximadamente \$781.242.

- ✓ Que en un cálculo comparativo la mesada pensional en el RDPMPD sería de \$2.351.680.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció **Protección S.A.** negando el incumplimiento del deber de información al señalar que siempre ofreció una asesoría transparente, integral y completa, brindando una información veraz y objetiva al demandante y que para el momento de la afiliación no era obligación realizar la “doble asesoría” pues esta solo surgió 16 años después de la afiliación. Adujo que tras dar una asesoría debida y tener la información clara, completa y objetiva, fue el demandante quien tomó la decisión de afiliarse voluntariamente, sin presión, fuerza o dolo, tal y como quedó plasmado en el correspondiente formulario. Agregó que sus asesores son permanentemente capacitados con el fin de que al momento de la afiliación puedan suministrar de manera técnica toda la información y asesoría completa y necesaria a sus clientes, incluyendo todo lo concerniente a la favorabilidad del traslado. Indicó que en las asesorías se realizan las respectivas proyecciones pensionales verbales con el fin de determinar el panorama de las mesadas pensionales. Igualmente precisó que, si bien a septiembre de 2018 el actor contaba con 859 semanas cotizadas, al 11 de febrero de 2019 aquellas ascendían a 876.14 completando 1.408,28 cotizadas en toda la vida laboral.

Colpensiones, por su parte, aceptó los hechos relativos a la fecha de afiliación a esta entidad, el traslado a Protección S.A. y la solicitud de retorno al régimen de prima media, aclarando que en virtud de la edad no le era factible acceder a dicha petición. Sobre los demás hechos indicó que no le constan.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 10 de junio de 2021, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín declaró:

- Que la AFP faltó a su obligación de diligencia debida de buen consejo al no dar información veraz y oportuna al demandante, ni verificar las condiciones particulares que hicieran más beneficioso a este permanecer en el RAIS frente al régimen de prima media.
- Que Protección causó un grave perjuicio económico en la mesada pensional que recibiría el actor y que es por ello que tiene responsabilidad profesional y constitucional en el perjuicio causado en la seguridad social en pensiones.

- La inaplicación constitucional de pérdida del RDPMPD del demandante cuando este se trasladó de otrora ISS al RAIS y en su lugar DECLARÓ que continúa inmerso en el RDPMPD pero a cargo de PROTECCIÓN S.A.
- Que el actor causó la pensión de vejez desde el *6 de diciembre de 2019*.

ABSOLVIÓ de todas las pretensiones a Colpensiones, sin perjuicio del cumplimiento de las órdenes que le impartiría.

Consecuencial a lo anterior, ORDENÓ lo siguiente:

- A Protección S.A. que dentro del mes siguiente a la fecha en que el demandante lo solicite por escrito y presente el certificado laboral de retiro, reconozca, liquide y pague la pensión de vejez bajo el Régimen de Prima Media (Ley 797 de 2003) junto con el retroactivo pensional desde el momento en que confluyeron el cumplimiento de la edad y el retiro laboral del demandante.
- A la AFP que dentro del mes siguiente al pago de la prestación, solicite por escrito a Colpensiones la elaboración del cálculo actuarial pensional, con miras a la subrogación pensional.
- A Colpensiones que, dentro de los dos meses siguientes a dicha petición, elabore el cálculo aludido, presentándolo a Protección S.A., quien a su vez debía pagarlo en el mes siguiente, monto que podía financiar con el dinero de la cuenta de ahorro individual, incluyendo el bono pensional. Preciso que mientras ello no sucediera continuaría reconociendo la pensión al actor; efectuado el pago le correspondería a Colpensiones su otorgamiento.

Finalmente, condenó en costas a Protección S.A. fijando como agencias en derecho la suma de \$3.632.000 a favor del actor.

Dentro del término concedido por la ley, la administradora del RAIS y Colpensiones interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

Comenzó por recordar que existían principios jurídicos, que como parte del ordenamiento, fundaban el sistema normativo, destacando el de favorabilidad, acceso al mínimo vital, primacía de la realidad, y eficacia de los derechos sociales de los trabajadores, último cuya afectación se sancionaba con la

ineficacia del acto jurídico que atentara contra este, explicando que era deber de cualquier autoridad, incluso judicial, proteger el acceso real y efectivo al derecho a la seguridad social en pensiones, por lo que de observarse que una persona había perdido la posibilidad real y efectiva de acceder a este derecho o se estaba menoscabando, esa autoridad debía garantizarlo, incluso de manera oficiosa, al ostentar el carácter de irrenunciable, inajenable e inherente al ser humano, claro está, si se acreditaba dicho perjuicio.

Luego centró sus apreciaciones en las consideraciones de la Corte Constitucional al limitar la movilidad entre regímenes, impidiéndola en los 10 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad pensional, basadas en un análisis económico como lo era evitar la descapitalización del régimen de prima media y defender la equidad en el reconocimiento de pensiones, tal y como se observa en la sentencia C-1024 de 2004, cuyos apartes cita.

Que precisamente basado en ello, encontraba que este tipo de pretensiones estaban causando un grave impacto en las finanzas públicas, siendo Colpensiones un tercero absoluto de cara al traslado de sus afiliados, quien asumiría las consecuencias de un acto dañoso cuando realmente debía recaer sobre la parte que intervino en dicho acto jurídico o contrato, destacando que era deber de toda autoridad pública de velar por la sostenibilidad fiscal, precisando que Colpensiones NO era el llamado a cargar con las consecuencias dañinas de la falta de información en que incurrió una AFP, por lo que el resarcimiento del perjuicio debía recaer exclusivamente sobre la respectiva administradora, siendo esta precisamente la postura de la Sala de Casación Laboral respecto de la ineficacia que pretendían los pensionados.

Advirtió que conocido era el principio de la responsabilidad según el cual quien causara un daño con su acción u omisión debía repararlo, omisión que devenía del incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 720 de 1994, que contemplaba obligaciones del gestor fiduciario, debiendo asumir Protección las consecuencias dañosas, no así Colpensiones que era un tercero ajeno a ese acto jurídico, destacando además que la actividad financiera de la AFP era altamente onerosa, tornándose improcedente simplemente ordenar el regreso automático a Colpensiones por esa falta al deber de información, pues realmente equivaldría a un enriquecimiento sin causa de la AFP dado el conglomerado económico al cual pertenecía, viéndose beneficiada de su propia negligencia o descuido, precisamente por eso algunas se allanaban, de ahí que debía retornar un cálculo actuarial que cubriera cualquier diferencia de la prestación en uno y otro régimen, dejando indemne el derecho al mínimo vital del afiliado, situación que se concordaba con lo normado en el art. 271 de la Ley 100 de 1993, contentivo de una sanción administrativa, referente a que la selección de régimen quedaba sin efecto pudiendo afiliarse a prima media por violentar la libertad de escogencia, y mientras ello ocurría debía otorgar al afiliado la prestación por vejez en los términos estipulados en

el régimen de prima media, quien había visto trasgredido su derecho dado que sólo bajo ciertas circunstancias únicamente podría optar por la garantía de pensión mínima, variando el monto de la prestación en un 130% conforme los cálculos efectuados por Protección S.A.

Por último, precisa que el demandante causó la pensión de vejez en el año 2019, cuando contaba con más de 1390 semanas cotizadas y cumplió la edad requerida.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN

2.2.1. PROTECCIÓN S.A.

Solicitó la revocatoria de la providencia, considerando que el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, indica que los regímenes pensionales tienen carácter excluyente, siendo selección del afiliado someterse a una u otras reglas, por lo cual se ha garantizado la selección libre de régimen al tenor del literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 271 ibídem, normas que mencionan que las consecuencias del desconocimiento de este derecho, da lugar a la aplicación de sanciones y además deja claro que si la afiliación no es libre y voluntaria, la misma quedará sin efectos, de este punto nace el deber de la AFP de brindar una información clara, completa y veraz a los afiliados, deber que ha existido desde la creación de las AFP, conforme el Decreto 663 del 1993, Decreto 656 del 1994 y el Decreto 720 de 1994, y posteriormente otras normas que consagran las fases de la información, avanzándose hacia conceptos como el buen consejo y la doble asesoría.

Que para resolver el problema jurídico de la ineficacia, es necesario remitirse a la jurisprudencia de la C.S.J. quien fijó dos reglas, en primer lugar, la existencia de la información por parte de la AFP, y en segundo la inversión de la carga de la prueba para acreditar lo anterior, y en razón a ello, se determinó que la consecuencia de la ineficacia de la afiliación es que las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes del traslado, lo que implica que el demandante conserve válidamente su afiliación al RPM, correspondiéndole a las AFP el traslado de los aportes que hubiese recibido con motivo de esa afiliación, por lo que las condenas plasmadas en la providencia recurrida, no son un efecto propio de la ineficacia según el precedente de la C.S.J., aunado a que, en la demanda no existen pretensiones bajo ese entendido (pensión a título de perjuicios por responsabilidad profesional), por lo cual el a quo estaba alterando el principio de congruencia y atentando contra el patrimonio de Protección.

Es por ello que considera que imponer una carga a la administradora resultaría excesivo e inconstitucional, pues se estaría desconociendo totalmente la naturaleza del RAIS establecida en la Ley 100 de 1993 y sus posteriores reformas. Resaltó que los dos regímenes pensionales tienen un

sistema diferente de capitalización y en ese sentido Protección no podía reconocer la pensión de vejez en los términos del régimen de prima media, por cuanto las características propias del RAIS estaban previamente determinadas y especificadas en la Ley 100 de 1993, normas que además fueron declaradas exequibles mediante sentencia C-086 de 2002, precisamente porque estaban ajustadas a la Constitución, de ahí que la decisión del juez desconocía la ley.

Finalmente, adujo que la decisión violaba el principio de la sostenibilidad financiera establecida por el artículo 48 de la Constitución Política ya que en el RAIS la pensión se liquidaba de una manera totalmente diferente al de prima media y los requisitos de uno y otro no eran equiparables. Reitera que la condena resultaba totalmente excesiva y consecuencialmente implicaba que la AFP asumiera con su propio patrimonio mesadas pensionales que se liquidan de una manera totalmente diferente y que llevarían inevitablemente a su insolvencia pues en el RAIS las pensiones se financian con los ahorros de las cuentas individuales de los afiliados más los rendimientos, bonos pensionales y lo que se gestiona como sistema de capitalización que es por lo cual se deriva el funcionamiento propio del fondo privado, esto es, las inversiones que hace en el mercado de valores para obtener unos beneficios económicos reflejados en los rendimientos de la cuenta de ahorro individual del demandante.

2.2.2. APELACIÓN COLPENSIONES

Muestra inconformidad con la declaratoria de que el demandante sigue inmerso en el régimen de prima media, además de lo referente al cálculo actuarial y la subrogación pensional. Destaca que desconoce el valor de la pensión toda vez que el actor no está vinculado al RDPMPD sino al RAIS, por lo tanto, tampoco conoce el IBL ni el IBC de los últimos 10 años.

Que conforme el análisis financiero de Protección, dicha prestación sería de \$2.300.000, lo que no resulta lógico si a voces del actor sus aportes eran superiores a dos SMLMV, y de aplicarse una tasa de remplazo de aproximadamente el 65% por tener 1.390 semanas, el monto sería inferior, dado que para ese efecto sus aportes realmente debían ser equivalentes a \$3.500.000 y aplicarse una tasa del 73%, de ahí que considere que dichos cálculos no están sujetos a la realidad.

Respecto a la subrogación, sostiene que deben tenerse en cuenta los planteamientos plasmados en la T-042 de 2016, según la cual tal posibilidad se radicaba en cabeza de un empleador cuando había una compartibilidad con la administradora en el pago a la pensión del trabajador.

Frente al cálculo actuarial aclara que este se da cuando no hay afiliación o cuando hay una omisión y dependiendo del tiempo en que la persona estuvo por fuera del sistema general de pensiones, se cuantifica una deuda, de ahí que Colpensiones necesariamente tenía que tener una información veraz, oportuna y real acerca de la situación del demandante y de los aportes obtenidos, para efectuar una eventual tasación.

En cuanto a las conmutaciones señaló que estas se realizan con el fin de que el empleador que tenga la compartibilidad de la pensión, consigne o pague a Colpensiones el valor a agregar. Es aquí donde la Corte Constitucional sostuvo que la subrogación se da en el evento de la compartibilidad.

Explicó que el cálculo actuarial, como tal, no es una devolución de dinero, sino traer valores presentes y verdaderos, a futuro, pasando a solventar el beneficio pensional pretendido. Razón por la cual a Colpensiones le es prohibido realizar subrogaciones pensionales en supuestos y en caso tal, lo que se tiene que realizar es un cálculo actuarial para liquidar, reconocer y pagar la pensión con base en el IBL de los últimos 10 años.

Es así como insiste que Colpensiones, en su calidad de administradora NO puede satisfacer las obligaciones impuestas por el fallador frente a cálculos actuariales o subrogaciones o conmutaciones, imposibles de realizar.

Añade que existen dos regímenes de pensión excluyentes entre sí, situación está que no hace admisible la posición del juez de primera instancia por cuanto cada régimen liquida, reconoce y paga de manera diferente las pensiones.

Considera que económicamente al demandante le hubiera convenido quedarse en el RAIS porque al día de hoy ha dejado de percibir \$28.409.332 y adicionalmente, a diciembre de 2021, dejaría de percibir el equivalente a \$34.769.014. Esto a razón de que el actor quedaría pensionado a partir de diciembre del año 2018 cuando cumplió los 62 años.

Mencionó que el Decreto 235 de 2010 reguló el intercambio de información entre entidades para el efectivo cumplimiento de funciones públicas, a través de mecanismos magnéticos y electrónicos, y para el caso era inexistente algún convenio o cronograma de trabajo entre la AFP y Colpensiones, tan es así que el cálculo financiero que hizo Protección, conforme lo antes expuesto, no tiene ningún soporte financiero conforme.

Destaca que en todo caso, los recursos que llegase a trasladar la AFP serían insuficientes salvo que se realizase un análisis financiero trimestral hasta el último día en que se pague la pensión,

teniéndose en cuenta la totalidad de cambios económicos del mercado. Anotó que lo anterior fue valorado por el juez de primera instancia al no decretar la ineficacia del traslado.

Aunado a lo anterior, de cara al principio jurídico de la responsabilidad, adujo ambas partes, incluyendo el afiliado, tenían obligaciones a su cargo, para el afiliado, asesorarse pues el desconocimiento de la ley no servía como excusa para alegar una condición desfavorable, sino que exhorta a que las partes no puedan aplicar la favorabilidad por desconocimiento del asunto, conforme el Decreto 720 de 1994.

Frente al principio de la favorabilidad, mencionó que para el presente caso no existen dos o más leyes que hablan del mismo asunto y que las personas se están aprovechando de este medio para decir que fueron engañados y que tienen una diferencia en la mesada en uno y otro régimen. Sin embargo, en este traslado solo se discute un incremento pensional, mas no la ley más favorable.

Además, no se está vulnerando el acceso efectivo al mínimo vital toda vez que la Corte Constitucional en la sentencia T-184 de 2009 manifestó que el mínimo vital era un derecho fundamental que tenía como característica ser cualitativo, por lo cual, se supone que cada quien vive de acuerdo al status adquirido de acuerdo a su vida. Sin embargo, esto no significa que la variación de los ingresos implique necesariamente una vulneración de este derecho.

Acorde a lo anterior, ningún principio ni derecho había sido vulnerado, insistiendo que el sistema general de pensiones tenía dos regímenes y el ciudadano por medio de su voluntad y autonomía escoge uno de ellos, no sin antes percatarse cuáles eran sus ventajas y desventajas.

Finalmente solicitó que se analizara los diversos pronunciamientos emitidos por el Tribunal Superior de Bogotá, que ratificaron los razonamientos de los juzgados de Bogotá respecto de los traslados de régimen o ineficacias, según los cuales se estaba descapitalizando el RDPMPD pues Colpensiones únicamente ha recopilado los aportes, intereses y gastos de administración de las AFP, generándose así un desbalance toda vez que por cada pensionado, debían existir 7 afiliados, pero lo que ocurría era lo contrario.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Protección S.A. reiteró los mismos argumentos plasmados no sólo en la contestación sino además en el recurso de apelación. Lo anterior por cuanto hizo un recuento del marco legislativo que regula los dos regímenes pensionales, resaltó que es deber de las AFP garantizar la toma de una decisión

libre y voluntaria, precedida de una información clara, completa y veraz que le permita entender a los afiliados cuáles son las reglas pensionales a las cuales se somete con la selección de cada uno de los regímenes. Frente al reconocimiento de la pensión de vejez por parte de la entidad, tal y como fue ordenada en el fallo, es decir, bajo los parámetros del RDPMPD y su posterior subrogación por parte de Colpensiones, adujo que vulneraría lo establecido por la Corte Suprema de Justicia y resultaría excesivo, ilegal e inconstitucional, aspecto en el que solicita se acoja el precedente fijado por dicha corte. Finalmente, frente a los perjuicios mencionó que no existe prueba alguna en la que la parte demandante demuestre haber sufrido alguno por su afiliación a Protección toda vez que la responsabilidad no puede ser objetiva y los perjuicios deben ser ciertos, no hipotéticos o eventuales. Considera que por ello el a quo no podía condenarla a pagar la pensión de vejez a título de perjuicios porque ni se pidió en la demanda, y era la parte accionante quien debía probar los perjuicios, de lo contrario se vulneraría el debido proceso.

Por el contrario, **la parte actora** solicitó confirmar la sentencia de primera instancia reiterando los fundamentos jurídicos del deber de información y las obligaciones que han surgido en torno al mismo. Indicó que en caso de que se considere procedente a teoría de la inaplicación constitucional concedida por el a quo, se debía ordenar al fondo privado la devolución de aportes, rendimientos, gastos de administración y cualquier otro rubro recibido, pues si el afiliado no iba a utilizar el fondo, era claro que no tenía que quedarse con ningún monto máxime teniendo en cuenta que se concedió el traslado.

Culmina su intervención señalando que:

la sanción no debe ser simple y plana en cuanto a derechos y rubros, que debe tener en cuenta la obligación, de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana en que se allana de un haber producido al menos cabo, de acuerdo como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en el cual se establece que dentro de cualquier proceso que se surta dentro de la administración de justicia la valoración de daños subrogados a la personas y a las cosas atenderá a la reparación integral y equidad y se deberá observar los criterios técnicos y actuaria.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo a lo planteado en los recursos de alzada, el problema jurídico consiste en determinar cuáles son los efectos jurídicos que genera el incumplimiento del deber de información, analizando no sólo si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, examinando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, sino además establecer la viabilidad de la indemnización de perjuicios,

analizando si se acreditó el daño, la responsabilidad de la AFP y el nexo causal, y a su vez si ello cimenta la procedencia del pago de un cálculo actuarial en los términos ordenados por el fallador, determinando además qué haberes le corresponde retornar a Protección S.A. y si la misma está encargada de asumir transitoriamente el pago de una pensión por vejez pero en los términos regulados para el régimen de prima media.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes

buen consejo		pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por el demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente 18 de diciembre de 2000 cuando suscribió el formulario de vinculación a PROTECCION S.A. (fl 37 del archivo 02 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto

del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la injerencia de su empleador para acceder a un puesto de trabajo.

Y es que expresamente el señor JAIME GALLEGO GRAJALES en el aludido interrogatorio expuso que es tecnólogo industrial y que actualmente está desempleado, la última empresa en la que trabajó fue en Coltabaco (hasta final de 2017) donde laboró 17 años y su última cotización a pensiones fue a sus 62 años (9 de diciembre de 2018) acumulando un total de 1.300 semanas. Respecto del traslado a Protección adujo que se afilió en diciembre del año 2000 por orden su nuevo empleador (Coltabaco), le dijeron *vaya a esa mesa para que cuadre lo de la pensión*, que al momento de la afiliación solo estaba un trabajador de la AFP que NO le indicó las características, sino que únicamente se limitó a hacerle firmar el formulario de afiliación. Que no recibió re-asesoría y que *algunas veces* recibió los extractos de su cuenta pero que ni los revisaba ni los entendía. Sobre el formulario de afiliación aclara que fue él quien suministró la información. Que el motivo para retornar a Colpensiones es tener una *pensión lógica*, es decir, acorde a su salario (\$2.500.000) pues en Protección le dijeron que se pensionaría con el mínimo, no recuerda la fecha. Que no acercó a Colpensiones a indagar sobre su futuro pensional.

Destáquese que el deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, aunque lo indicado por el demandante dejase entrever cierta información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una

persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **MODIFICARÁ** la decisión en este punto, declarándose la ineficacia del traslado al RAIS y el consecuencial retorno del afiliado al régimen de prima media, revocándose los efectos que de tal retorno derivó el juez.

Y es que aquel considera que el afiliado verá truncado su derecho a disfrutar de una prestación en un monto superior, dado que infiere que habría una reducción en la tasa de remplazo en la pensión por vejez que recibiría de permanecer en el RAIS, en contraste con aquella ofrecida por el régimen de prima media, aseveración que soporta en los cálculos que mal o bien certifica Protección (archivo 13), cuando mediante misiva del 8 de junio de 2021, en respuesta al requerimiento efectuado por el despacho, señaló que:

Datos básicos a fecha de realización del cálculo 08 de junio de 2021:

- Fecha de nacimiento: 09 de diciembre de 1956
- Sexo: masculino
- Sin beneficiarios de ley
- Valor cuenta de ahorro Individual: \$145.371.749
- Valor bono actualizado y capitalizado: \$76.899.905
- Capital total: \$222.271.654
- Semanas cotizadas: 1.406
- Último periodo cotizado: 30/12/2017
- Capital necesario – pensión mínima: \$277.750.570

Y añadió:

Cálculo en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad:

De acuerdo con lo anterior, el afiliado no cuenta con el capital necesario para financiar el pago de una pensión mínima. No obstante, cumple requisitos de ley para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en la modalidad de Retiro Programado.

Cálculo en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida:

El Ingreso Base de Liquidación (IBL) resultado de las cotizaciones realizadas al Sistema General de Pensiones de los últimos 10 años con corte al 09 de diciembre de 2018 es \$3.657.575 y, de acuerdo con el número de semanas cotizadas la tasa de reemplazo es de 66.16%. Por consiguiente, el valor estimado de la mesada pensional a fecha de referencia es \$2.419.820.

- Valor de la mesada actualizado con inflación al año 2021: \$ 2.633.373.

El apoderado de Colpensiones, a través del recurso de alzada, ataca tales hallazgos. Empero, al margen de su veracidad, o que eventualmente ello pudiese o no acarrear la indemnización de un perjuicio, lo cierto es que tal diferencia económica, de existir, NO está llamada a cimentar la procedencia de un cálculo actuarial y/o subrogación pensional, menos aun cuando dichas figuras, a voces del legislador, resultan aplicables en ámbitos diferentes.

Aunado a lo anterior, habrá de destacarse que, en parte alguna, se acreditó que la administradora del RAIS hubiese brindado una errada información al actor al momento de afiliarse, siendo carga de quien aduce un perjuicio, demostrar no sólo su existencia, sino que el mismo está ligado a tal actuar, es decir, ese nexo de causalidad, pues aunque quisiese asimilarse el daño al menoscabo en la tasa de remplazo, ello no releva de la actividad probatoria que en tal sentido se debe desplegar, actividad que precisamente NO ejecutó porque NO era una pretensión.

Y es que la ineficacia aquí declarada, no deviene de tal hecho, es decir, del actuar negligente de la entidad, ni de que se hubiese configurado un error de hecho en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa como vicio en el consentimiento, tal ineficacia nace de la omisión de la AFP en cuanto a no cumplir la carga de la prueba que el precedente judicial ha radicado en cabeza suya, es decir, se cimenta en el hecho de que el fondo no demostró la calidad de la asesoría que en su momento brindó al afiliado.

Así las cosas, si se desconocen los pormenores de la misma, no puede tildarse de indebida o irregular, por lo que el eventual perjuicio que alega el fallador, partiendo de la idea que se hubiese demostrado un daño, no puede indefectiblemente desprenderse de tal asesoría en la que el demandante decidió trasladarse de régimen, asesoría cuyo contenido integral se desconoce, pues lo dicho por el accionante en el interrogatorio de parte absuelto, tiene como finalidad provocar una confesión, no acreditar un hecho.

Aunado a ello, aunque tal tesis no fuera de recibo, a igual conclusión llegaría esta Magistratura.

Y es que realmente se torna innecesario entrar en disquisiciones puntuales en torno a la acreditación o no de un eventual perjuicio respecto del futuro pensional del afiliado, cuya demostración cuestiona la apoderada de Protección S.A. en el recurso de alzada y en los alegatos presentados ante esta instancia, (incluso solicita se siga el precedente que en esta materia ha sentado la Sala de Casación Laboral), toda vez que aunque pudiesen resultar interesantes los planteamientos del a quo, lo cierto es que otras son las consecuencias que se han derivado en este tipo de asuntos donde nuestro órgano de cierre impone es la declaratoria de ineficacia junto con el retorno de ciertos haberes, como se pasará a explicar, de ahí que siguiendo este precedente consecuencialmente se entienda que la persona permanece en el régimen primigenio, siendo Colpensiones y no otra entidad la encargada de asumir el reconocimiento integral de la futura prestación por vejez en caso de acreditarse el cumplimiento de los requisitos que contempla la ley.

En tal sentido, deberá REVOCARSE la orden del fallador en cuanto a la declaratoria de causación de un daño por parte de Protección, consecuencialmente todo lo atinente al pago del cálculo actuarial/título pensional a título de indemnización por perjuicios.

Aunado a ello, la aludida ineficacia realmente implica es que la administradora del RAIS accionada, traslade a COLPENSIONES **todos** los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, de lo contrario Colpensiones no estaría recibiendo la totalidad del dinero que se debe retornar conforme el claro el precedente sentado por nuestro órgano de cierre, punto en el que se ADICIONARÁ la decisión adoptada por el a quo, quien tras exponer sus razones, ordenó a Protección devolver cualquier valor que hubiese ingresado a la cuenta de ahorro individual del demandante, contexto bajo el cual dicha orden sólo incluiría el retorno de cotizaciones y rendimientos, más NO la totalidad de los ítems dado que también se extiende a los componentes de los gastos de administración.

Recordemos que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(…) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(…) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que lo procedente es el retorno de la totalidad del dinero recibido por concepto de afiliación, toda vez que no se puede ver afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente al monto total del correspondiente aporte legal.

Empero, esto no quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Respecto a la INDEXACIÓN de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente ADICIONAR el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Protección S.A, teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, PROTECCIÓN S.A deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados.

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

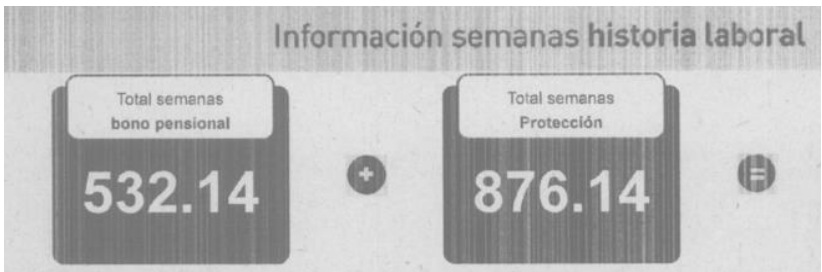
PENSIÓN VEJEZ

Tras la declaratoria de ineficacia, ha de entenderse que el señor JAIME GALLEG0 GRAJALES permaneció afiliado al régimen de prima media sin solución de continuidad, por lo que le es dable analizar la procedencia de la prestación por vejez de acuerdo a los parámetros que para el efecto reguló la Ley 797 de 2003, que exige el cumplimiento de 62 años, en el caso de los hombres, además de 1.300 semanas cotizadas al sistema. Veamos.

Conforme se aprecia en la copia de la cédula de ciudadanía obrante en el archivo 05 del expediente digital, aquel nació el 9 de diciembre de 1956, cumpliendo 62 años el mismo día y mes del año 2018, y aunque NO obra en el plenario el Registro Civil de Nacimiento, aquel dato sí es coincidente con el que aprecia en la restante documentación, incluso incorporada por Colpensiones, entre ellas la Historia Laboral y el Certificado Nro. 077082019 expedido por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de Defensa Judicial (fl. 197 archivo 02), entidad que por demás, mediante Concepto 4273229 de 2013² reconoció que la cédula era un documento idóneo para acreditar la edad al momento de reclamar este tipo de prestaciones económicas. Se encuentra pues satisfecho uno de los dos requisitos que contempla la norma.

En cuanto a la densidad, de acuerdo con las diversas Historias Laborales allegadas por las entidades, el demandante también satisface el requisito en los términos exigidos por la ley.

Protección S.A. certifica lo siguiente (fl. 140 archivo 02):



² 4. Conclusiones
i) El registro civil fue estatuido por la Ley 92 de 1938 como único documento válido para acreditar el estado civil a partir de 15 de junio de 1938 y con anterioridad a ésta fecha, con la respectiva partida de bautismo.
ii) La cédula de ciudadanía es el único documento válido, confiable e idóneo de identificación de las personas mayores de edad, de conformidad con lo regulado por la Ley 39 de 1961 y el Decreto 2241 de 1986 o Código Electoral.
iii) En materia pensional, salvo lo estipulado en la Ley 962 de 2005 (de forma potestativa) y el Decreto 1889 de 1994 (para las pensiones de sobrevivientes únicamente), no existe ninguna otra normatividad que faculte a las entidades públicas o privadas para exigir el registro civil de nacimiento para adelantar el trámite de solicitudes pensionales.
iv) Como quiera que con el registro civil de nacimiento se verifica, entre otros, la fecha de nacimiento y dicha data viene incluida en la cédula de ciudadanía, con el fin de reconocer las prestaciones económicas en las que se exija acreditar una edad determinada, éste documento será el idóneo para tal fin, pudiendo prescindirse válidamente del registro civil de nacimiento o de la partida de bautismo.
v) Deberá seguirse exigiendo registro civil o partida para el reconocimiento de aquéllas prestaciones en las que necesariamente deba demostrarse el parentesco, tales como (...)
vi) La cédula de ciudadanía es un documento expedido por autoridad pública competente que se reputa auténtica conforme lo estipulado en el Artículo 25 del Decreto 019 de 2012.

Dicho reporte es coincidente con el allegado por Colpensiones (archivo 07):

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
2016108763	LIBRERIA ACADEMICA	08/03/1979	09/09/1979	\$3.300	26,57	0,00	0,00	26,57
2013900017	IND MET UNIDAS	10/11/1983	20/02/1984	\$11.850	14,71	0,00	0,00	14,71
2016108763	LIBRERIA ACADEMICA	26/06/1985	18/02/1986	\$17.790	34,00	0,00	0,00	34,00
2027105225	TURISMO AYURA LTDA	14/08/1986	22/10/1986	\$17.790	10,00	0,00	0,00	10,00
2032601814	MEJORAS Y CREACIONES	18/12/1986	31/12/1994	\$180.000	419,43	0,00	0,00	419,43
890940309	MEJORAS Y CREACIONES	01/01/1995	31/01/1995	\$180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
70076490	JAIME GALLEGO G	01/09/1995	30/09/1995	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
899999040	REGISTRADURIA NACION	01/10/1997	31/10/1997	\$247.000	4,00	0,00	0,00	4,00
899999040	REGISTRADURIA NACION	01/11/1997	30/11/1997	\$18.000	0,29	0,00	0,00	0,29
899999040	REGISTRADURIA NACION	01/12/1997	31/12/1997	\$265.000	4,29	0,00	0,00	4,29
899999040	REGISTRADURIA NACION	01/02/1998	28/02/1998	\$228.000	3,00	0,00	0,00	3,00
899999040	REGISTRADURIA NAL DE	01/03/1998	31/03/1998	\$163.000	2,14	0,00	0,00	2,14
899999040	REGISTRADURIA NACION	01/05/1998	31/05/1998	\$233.000	2,29	0,00	0,00	2,29
899999040	REGISTRADURIA NACION	01/06/1998	30/06/1998	\$422.000	3,14	0,00	0,00	3,14
890913990	JIRO S A	01/10/2000	31/10/2000	\$104.000	1,71	0,00	0,00	1,71
890913990	JIRO S A	01/11/2000	30/11/2000	\$277.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890913990	JIRO S A	01/12/2000	31/12/2000	\$243.000	2,14	0,00	0,00	2,14
[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:								532,00

Bajo el contexto descrito es factible concluir que la prestación por vejez se causó cuando el afiliado cumplió la edad, concretamente en diciembre de 2018, pues para esa calenda contaba con una densidad muy superior a 1300 semanas, fecha por demás coincidente con el disfrute, como se analizará en las siguientes líneas.

De otro lado, respecto al **DISFRUTE** se ha considerado que éste se da cuando una vez reunidos los requisitos, un asegurado solicita a la entidad administradora el reconocimiento de la prestación y se ha dado el retiro o desafiliación tácita del sistema general de pensiones, pues para la liquidación de la prestación se debe tener en cuenta hasta el último aporte efectuado, ya que mal se haría en reconocer un retroactivo sobre unas semanas que efectivamente sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

Bajo éste panorama, la última cotización al régimen pensional sería la determinante para establecer la fecha de disfrute. Para ello, nos remitimos a la información que se extrae de la última de las Historias Laborales expedidas por Protección S.A., siendo tal aquella que obra en el archivo 02, folios 140 a 147, cuya fecha de generación data del 11 de febrero de 2019, en la cual se aprecian aportes hasta el ciclo de diciembre de 2017, aspecto que guarda coincidencia con lo narrado por el actor en el interrogatorio cuando refiere que hasta tal data laboró con el último empleador.

Incluso, tal y como se mencionó, en junio de 2021, en respuesta a oficio, Protección S.A. reiteró que el último periodo cotizado fue 30/12/2017 (fl. 4 archivo 13).

Quiere esto decir que, para la fecha de causación del derecho, el señor Gallego Grajales ya había cesado los aportes al régimen pensional.

No obstante, por razones que desconoce la Sala, otra cosa indicó expresamente el a quo, incluso en la parte resolutive del fallo, señalando que la prestación se causó el día 6 de diciembre de 2019. La parte actora, con interés para recurrir una decisión adversa a sus pretensiones, nada dijo, aspecto que NO le es dable modificar a la Sala por cuanto el análisis que se efectúa en este punto lo es en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de los intereses de Colpensiones, sin que pueda hacerse más gravosa la situación de la entidad.

Quiere esto decir que, en atención al error del juez (llamado en el numeral décimo del fallo – enunciado por segunda vez), esta Magistratura entenderá, para los efectos de la cuantificación, que la pensión **sólo es dable otorgarla desde el 6 de diciembre de 2019**, restándole un año al retroactivo dado que, como se dijo, ello NO fue objeto del recurso de alzada por parte del apoderado del actor, quien en audiencia ninguna inconformidad mostró con la sentencia.

Procedemos entonces a revisar el IBL y consecuentemente el establecimiento de la tasa de remplazo, teniendo en cuenta el promedio de los aportes efectuados en los últimos 10 años, por serle más favorable de acuerdo a lo previsto en el art. 21 de la Ley 100 de 1993, así:

TASA DE REEMPLAZO ARTÍCULO 10 DE LA LEY 797 DE 200			
r = 65.50 - 0.50 s			
r = porcentaje del ingreso de liquidación.			
s = número de salarios mínimos legales mensuales vige			
Salario mínimo	2019	\$ 828.116	
Salario mínimo dentro del IE		4,556700604	
Porcentaje IBL (r=)		63,22	
Semanas mínimas requerid		1.300	
semanas adicionales a las mínimas requeridas		108,29	
Grupo de 50 semanas adicionales a las mínimas		2	
1,5 x Grupo de 50 semana		3,00	
r		63,22	
Tasa de reempla		66,22	66,22%

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DÍAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-ene-08	31-ene-08	\$ 1.642.000	30	\$ 2.533.024	\$ 21.109	2018	100,00	2007	64,82
1-feb-08	29-feb-08	\$ 1.372.000	30	\$ 2.116.510	\$ 17.638	2018	100,00	2007	64,82
1-mar-08	31-mar-08	\$ 3.237.000	30	\$ 4.993.544	\$ 41.613	2018	100,00	2007	64,82
1-abr-08	30-abr-08	\$ 1.708.000	30	\$ 2.634.839	\$ 21.957	2018	100,00	2007	64,82
1-may-08	31-may-08	\$ 1.730.000	30	\$ 2.668.777	\$ 22.240	2018	100,00	2007	64,82
1-jun-08	30-jun-08	\$ 1.727.000	30	\$ 2.664.149	\$ 22.201	2018	100,00	2007	64,82
1-jul-08	31-jul-08	\$ 1.711.000	30	\$ 2.639.467	\$ 21.996	2018	100,00	2007	64,82
1-ago-08	31-ago-08	\$ 2.629.000	30	\$ 4.055.615	\$ 33.797	2018	100,00	2007	64,82
1-sep-08	30-sep-08	\$ 4.363.000	30	\$ 6.730.563	\$ 56.088	2018	100,00	2007	64,82
1-oct-08	31-oct-08	\$ 1.876.000	30	\$ 2.894.003	\$ 24.117	2018	100,00	2007	64,82
1-nov-08	30-nov-08	\$ 1.642.000	30	\$ 2.533.024	\$ 21.109	2018	100,00	2007	64,82
1-dic-08	31-dic-08	\$ 4.678.000	30	\$ 7.216.496	\$ 60.137	2018	100,00	2007	64,82
1-ene-09	31-ene-09	\$ 1.693.000	30	\$ 2.425.544	\$ 20.213	2018	100,00	2008	69,80
1-feb-09	28-feb-09	\$ 1.440.000	30	\$ 2.063.073	\$ 17.192	2018	100,00	2008	69,80
1-mar-09	31-mar-09	\$ 3.443.000	30	\$ 4.932.751	\$ 41.106	2018	100,00	2008	69,80
1-abr-09	30-abr-09	\$ 2.068.000	30	\$ 2.962.803	\$ 24.690	2018	100,00	2008	69,80
1-may-09	31-may-09	\$ 1.717.000	30	\$ 2.459.928	\$ 20.499	2018	100,00	2008	69,80
1-jun-09	30-jun-09	\$ 1.663.000	30	\$ 2.382.563	\$ 19.855	2018	100,00	2008	69,80
1-jul-09	31-jul-09	\$ 1.732.000	30	\$ 2.481.419	\$ 20.678	2018	100,00	2008	69,80
1-ago-09	31-ago-09	\$ 2.555.000	30	\$ 3.660.522	\$ 30.504	2018	100,00	2008	69,80
1-sep-09	30-sep-09	\$ 1.663.000	30	\$ 2.382.563	\$ 19.855	2018	100,00	2008	69,80
1-oct-09	31-oct-09	\$ 1.832.000	30	\$ 2.624.688	\$ 21.872	2018	100,00	2008	69,80
1-nov-09	30-nov-09	\$ 1.963.000	30	\$ 2.812.370	\$ 23.436	2018	100,00	2008	69,80
1-dic-09	31-dic-09	\$ 2.763.000	30	\$ 3.958.522	\$ 32.988	2018	100,00	2008	69,80
1-ene-10	31-ene-10	\$ 4.103.000	30	\$ 5.762.963	\$ 48.025	2018	100,00	2009	71,20
1-feb-10	28-feb-10	\$ 3.453.000	30	\$ 4.849.990	\$ 40.417	2018	100,00	2009	71,20
1-mar-10	31-mar-10	\$ 3.798.000	30	\$ 5.334.568	\$ 44.455	2018	100,00	2009	71,20
1-abr-10	30-abr-10	\$ 1.972.000	30	\$ 2.769.818	\$ 23.082	2018	100,00	2009	71,20
1-may-10	31-may-10	\$ 2.003.000	30	\$ 2.813.360	\$ 23.445	2018	100,00	2009	71,20
1-jun-10	30-jun-10	\$ 2.036.000	30	\$ 2.859.710	\$ 23.831	2018	100,00	2009	71,20
1-jul-10	31-jul-10	\$ 2.373.000	30	\$ 3.333.052	\$ 27.775	2018	100,00	2009	71,20
1-ago-10	31-ago-10	\$ 3.186.000	30	\$ 4.474.969	\$ 37.291	2018	100,00	2009	71,20
1-sep-10	30-sep-10	\$ 2.120.000	30	\$ 2.977.695	\$ 24.814	2018	100,00	2009	71,20
1-oct-10	31-oct-10	\$ 2.028.000	30	\$ 2.848.474	\$ 23.737	2018	100,00	2009	71,20
1-nov-10	30-nov-10	\$ 2.077.000	30	\$ 2.917.298	\$ 24.311	2018	100,00	2009	71,20
1-dic-10	31-dic-10	\$ 8.444.000	30	\$ 11.860.214	\$ 98.835	2018	100,00	2009	71,20
1-ene-11	31-ene-11	\$ 1.940.000	30	\$ 2.641.116	\$ 22.009	2018	100,00	2010	73,45
1-feb-11	28-feb-11	\$ 1.926.000	30	\$ 2.622.056	\$ 21.850	2018	100,00	2010	73,45
1-mar-11	31-mar-11	\$ 4.345.000	30	\$ 5.915.283	\$ 49.294	2018	100,00	2010	73,45
1-abr-11	30-abr-11	\$ 2.227.000	30	\$ 3.031.838	\$ 25.265	2018	100,00	2010	73,45
1-may-11	31-may-11	\$ 1.904.000	30	\$ 2.592.105	\$ 21.601	2018	100,00	2010	73,45
1-jun-11	30-jun-11	\$ 1.917.000	30	\$ 2.609.804	\$ 21.748	2018	100,00	2010	73,45
1-jul-11	31-jul-11	\$ 2.069.000	30	\$ 2.816.736	\$ 23.473	2018	100,00	2010	73,45
1-ago-11	31-ago-11	\$ 3.180.000	30	\$ 4.329.252	\$ 36.077	2018	100,00	2010	73,45
1-sep-11	30-sep-11	\$ 2.193.000	30	\$ 2.985.550	\$ 24.880	2018	100,00	2010	73,45
1-oct-11	31-oct-11	\$ 2.112.000	30	\$ 2.875.277	\$ 23.961	2018	100,00	2010	73,45
1-nov-11	30-nov-11	\$ 1.883.000	30	\$ 2.563.516	\$ 21.363	2018	100,00	2010	73,45
1-dic-11	31-dic-11	\$ 2.990.000	30	\$ 4.070.586	\$ 33.922	2018	100,00	2010	73,45
1-ene-12	31-ene-12	\$ 5.268.000	30	\$ 6.914.138	\$ 57.618	2018	100,00	2011	76,19
1-feb-12	29-feb-12	\$ 2.436.000	30	\$ 3.197.198	\$ 26.643	2018	100,00	2011	76,19
1-mar-12	31-mar-12	\$ 4.376.000	30	\$ 5.743.407	\$ 47.862	2018	100,00	2011	76,19
1-abr-12	30-abr-12	\$ 2.337.000	30	\$ 3.067.263	\$ 25.561	2018	100,00	2011	76,19
1-may-12	31-may-12	\$ 2.390.000	30	\$ 3.136.824	\$ 26.140	2018	100,00	2011	76,19
1-jun-12	30-jun-12	\$ 2.174.000	30	\$ 2.853.329	\$ 23.778	2018	100,00	2011	76,19
1-jul-12	31-jul-12	\$ 2.349.000	30	\$ 3.083.013	\$ 25.692	2018	100,00	2011	76,19
1-ago-12	31-ago-12	\$ 3.302.000	30	\$ 4.333.805	\$ 36.115	2018	100,00	2011	76,19
1-sep-12	30-sep-12	\$ 2.124.000	30	\$ 2.787.705	\$ 23.231	2018	100,00	2011	76,19
1-oct-12	31-oct-12	\$ 2.246.000	30	\$ 2.947.827	\$ 24.565	2018	100,00	2011	76,19
1-nov-12	30-nov-12	\$ 2.293.000	30	\$ 3.009.514	\$ 25.079	2018	100,00	2011	76,19
1-dic-12	31-dic-12	\$ 3.253.000	30	\$ 4.269.493	\$ 35.579	2018	100,00	2011	76,19
1-ene-13	31-ene-13	\$ 5.289.000	30	\$ 6.776.665	\$ 56.472	2018	100,00	2012	78,05
1-feb-13	28-feb-13	\$ 2.321.000	30	\$ 2.973.840	\$ 24.782	2018	100,00	2012	78,05
1-mar-13	31-mar-13	\$ 4.200.000	30	\$ 5.381.356	\$ 44.845	2018	100,00	2012	78,05
1-abr-13	30-abr-13	\$ 2.066.000	30	\$ 2.647.115	\$ 22.059	2018	100,00	2012	78,05
1-may-13	31-may-13	\$ 2.141.000	30	\$ 2.743.210	\$ 22.860	2018	100,00	2012	78,05
1-jun-13	30-jun-13	\$ 2.066.000	30	\$ 2.647.115	\$ 22.059	2018	100,00	2012	78,05
1-jul-13	31-jul-13	\$ 2.095.000	30	\$ 2.684.272	\$ 22.369	2018	100,00	2012	78,05
1-ago-13	31-ago-13	\$ 3.161.000	30	\$ 4.050.111	\$ 33.751	2018	100,00	2012	78,05
1-sep-13	30-sep-13	\$ 2.066.000	30	\$ 2.647.115	\$ 22.059	2018	100,00	2012	78,05
1-oct-13	31-oct-13	\$ 2.141.000	30	\$ 2.743.210	\$ 22.860	2018	100,00	2012	78,05
1-nov-13	30-nov-13	\$ 2.066.000	30	\$ 2.647.115	\$ 22.059	2018	100,00	2012	78,05
1-dic-13	31-dic-13	\$ 3.235.000	30	\$ 4.144.926	\$ 34.541	2018	100,00	2012	78,05
1-ene-14	31-ene-14	\$ 5.978.000	30	\$ 7.513.859	\$ 62.615	2018	100,00	2013	79,56
1-feb-14	28-feb-14	\$ 2.437.000	30	\$ 3.063.110	\$ 25.526	2018	100,00	2013	79,56
1-mar-14	31-mar-14	\$ 4.431.000	30	\$ 5.569.406	\$ 46.412	2018	100,00	2013	79,56
1-abr-14	30-abr-14	\$ 2.179.000	30	\$ 2.738.826	\$ 22.824	2018	100,00	2013	79,56
1-may-14	31-may-14	\$ 2.259.000	30	\$ 2.839.379	\$ 23.661	2018	100,00	2013	79,56
1-jun-14	30-jun-14	\$ 2.179.000	30	\$ 2.738.826	\$ 22.824	2018	100,00	2013	79,56
1-jul-14	31-jul-14	\$ 2.331.000	30	\$ 2.929.877	\$ 24.416	2018	100,00	2013	79,56
1-ago-14	31-ago-14	\$ 3.362.000	30	\$ 4.225.760	\$ 35.215	2018	100,00	2013	79,56
1-sep-14	30-sep-14	\$ 2.179.000	30	\$ 2.738.826	\$ 22.824	2018	100,00	2013	79,56
1-oct-14	31-oct-14	\$ 2.259.000	30	\$ 2.839.379	\$ 23.661	2018	100,00	2013	79,56
1-nov-14	30-nov-14	\$ 2.179.000	30	\$ 2.738.826	\$ 22.824	2018	100,00	2013	79,56
1-dic-14	31-dic-14	\$ 3.342.000	30	\$ 4.200.622	\$ 35.005	2018	100,00	2013	79,56
1-ene-15	31-ene-15	\$ 5.760.000	30	\$ 6.984.384	\$ 58.203	2018	100,00	2014	82,47
1-feb-15	28-feb-15	\$ 2.742.000	30	\$ 3.324.858	\$ 27.707	2018	100,00	2014	82,47
1-mar-15	31-mar-15	\$ 4.659.000	30	\$ 5.649.348	\$ 47.078	2018	100,00	2014	82,47
1-abr-15	30-abr-15	\$ 2.424.000	30	\$ 2.939.262	\$ 24.494	2018	100,00	2014	82,47
1-may-15	31-may-15	\$ 2.367.000	30	\$ 2.870.145	\$ 23.918	2018	100,00	2014	82,47
1-jun-15	30-jun-15	\$ 2.292.000	30	\$ 2.779.203	\$ 23.160	2018	100,00	2014	82,47
1-jul-15	31-jul-15	\$ 2.376.000	30	\$ 2.881.059	\$ 24.009	2018	100,00	2014	82,47
1-ago-15	31-ago-15	\$ 3.524.000	30	\$ 4.273.085	\$ 35.609	2018	100,00	2014	82,47
1-sep-15	30-sep-15	\$ 2.416.000	30	\$ 2.929.561	\$ 24.413	2018	100,00	2014	82,47
1-oct-15	31-oct-15	\$ 2.575.000	30	\$ 3.122.359	\$ 26.020	2018	100,00	2014	82,47
1-nov-15	30-nov-15	\$ 2.292.000	30	\$ 2.779.203	\$ 23.160	2018	100,00	2014	82,47
1-dic-15	31-dic-15	\$ 7.981.000	30	\$ 9.677.495	\$ 80.646	2018	100,00	2014	82,47
1-ene-16	31-ene-16	\$ 7.263.000	30	\$ 8.248.522	\$ 68.738	2018	100,00	2015	88,05
1-feb-16	29-feb-16	\$ 5.006.000	30	\$ 5.685.268	\$ 47.377	2018	100,00	2015	88,05
1-mar-16	31-mar-16	\$ 5.383.000	30	\$ 6.113.424	\$ 50.945	2018	100,00	2015	88,05
1-abr-16	30-abr-16	\$ 2.568.000	30	\$ 2.916.454	\$ 24.304	2018	100,00	2015	88,05
1-may-16	31-may-16	\$ 2.568.000	30	\$ 2.916.454	\$ 24.304	2018	100,00	2015	88,05
1-jun-16	30-jun-16	\$ 2.496.000	30	\$ 2.834.684	\$ 23.622	2018	100,00	2015	88,05
1-jul-16	31-jul-16	\$ 2.568.000	30	\$ 2.916.454	\$ 24.304	2018	100,00	2015	88,05
1-ago-16	31-ago-16	\$ 3.905.000	30	\$ 4.434.873	\$ 36.957	2018	100,00	2015	88,05
1-sep-16	30-sep-16	\$ 2.596.000	30	\$ 2.948.253	\$ 24.569	2018	100,00	2015	88,05
1-oct-16	31-oct-16	\$ 2.568.000	30	\$ 2.916.454	\$ 24.304	2018	100,00	2015	88,05

Ahora, atendiendo a la fecha de causación, de acuerdo a lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, únicamente es procedente el pago de 13 mesadas, cuantificándose un retroactivo que conforme el cuadro anexo, asciende a **\$134.584.433** correspondientes a las mesadas causadas entre el 6 de diciembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2023, así:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2019	3,80%	0,83	\$ 2.498.859	\$ 2.074.053
2020	1,61%	13	\$ 2.593.816	\$ 33.719.603
2021	5,62%	13	\$ 2.635.576	\$ 34.262.489
2022	13,12%	13	\$ 2.783.695	\$ 36.188.041
2023		9	\$ 3.148.916	\$ 28.340.247
			TOTAL	\$ 134.584.433

A partir del 1 de octubre de 2023 Colpensiones deberá continuar reconociendo una prestación mensual en cuantía de \$3.148.916, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley, teniendo en cuenta 13 mesadas anuales.

Se autorizará a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional causado en cumplimiento de esta sentencia, el porcentaje destinado a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, toda vez que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es un principio general del sistema de seguridad social, entendido este como la práctica de ayuda mutua entre las personas, generaciones y sectores, que no está condicionado a la prestación de un servicio sino a la contribución económica para el fortalecimiento del sistema.

Véase para el efecto lo que sobre el particular razonó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de radicación 54480 y 46234.

Nada se mencionará en cuanto a la procedencia o improcedencia de los intereses moratorios deprecados, dado que el a quo absolvió de su reconocimiento, sin comportar un punto apelado.

Empero, se accederá al reconocimiento de la INDEXACIÓN de las sumas que se adeudan al actor en cumplimiento de esta sentencia, atendiendo que efectivamente este dinero no ha entrado al patrimonio del demandante y por efectos de inflación, cuando lo haga, el mismos se habrá visto envilecido por el paso del tiempo. Por ello, Colpensiones deberá indexar el retroactivo de la pensión de vejez, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, el índice inicial será el aludido IPC vigente a la fecha de causación de cada mesada, y como índice final el IPC vigente al momento del pago. Aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$.

En este orden de ideas la decisión adoptada será **MODIFICADA, ADICIONADA Y REVOCADA** en los aspectos antes aludidos.

Sin costas en esta instancia dado que las entidades recurrentes tuvieron éxito parcial en el recurso.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **JAIME GALLEGO GRAJALES** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 70.076.490 contra **PROTECCIÓN S.A y COLPENSIONES**, en los siguientes términos:

- a) **DECLARAR** la **INEFICACIA** de la afiliación del demandante al RAIS, entendiéndose que estuvo válidamente afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad.
- b) En consecuencia, de lo anterior, se **CONDENA** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante desde el cambio de régimen, tales como, aportes consignados en la cuenta de ahorro individual y los rendimientos financieros, junto con sus frutos e intereses.
- c) **CONDENAR** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con cargo a su propio patrimonio, los 3 ítems que componen los gastos de administración de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, es decir, costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, montos que serán debidamente **INDEXADOS** por dicha administradora del RAIS al momento del pago, oportunidad en la que además **deberá discriminar** los conceptos entregados a COLPENSIONES, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
- d) Se **ORDENA** a COLPENSIONES recibir los dineros trasladados, reflejando en la Historia Laboral la **totalidad** de cotizaciones realizadas por el demandante al régimen pensional

SEGUNDO: se **REVOCA** la declaratoria de causación de un daño por parte de Protección S.A. y consecuencialmente todo lo atinente al pago del cálculo actuarial/título pensional por concepto de

indemnización por perjuicios y el otorgamiento de la pensión de vejez en los términos estipulados para el régimen de prima media.

TERCERO: se **MODIFICA** la sentencia en el entendido que **COLPENSIONES** a reconocerá y pagará al señor JAIME GALLEG0 GRAJALES, la **PENSIÓN DE VEJEZ** a partir del 6 de diciembre de 2019, cuantificándose un retroactivo que al 30 de septiembre de 2023 asciende a **\$134.584.433**, monto que junto al retroactivo que se cause a la fecha del cumplimiento de la obligación, será INDEXADO, sumas respecto de las cuales se autoriza a la entidad a efectuar los correspondientes descuentos en salud, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

A partir de 1 de octubre de 2023, la Colpensiones continuará reconociendo la prestación en cuantía de \$3.148.916, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley, teniendo en cuenta 13 mesadas por año.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- Apelación sentencia
Demandante:	JAIME GALLEGU GRAJALES
Demandado:	COLPENSIONES y PROTECCION S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-003-2018-00890-01.
Tema:	ineficacia traslado y pensión vejez
Decisión:	MODIFICA
Fecha de la sentencia:	13/10/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 17/10/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario